

proceder á lo que haya lugar; estando representadas en esta Superioridad el tercerista Juliá Massó y la sucesión de Don Juan Amell Milá por el Procurador Don Tomás Caballero Osorio, bajo la dirección del Letrado Don Francisco de P. Acuña y Paniagua, el Estado por el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Aguada por el Procurador Don Emigdio S. Ginorio y Alayón, dirigido por el Letrado Don Rafael Lopez Landrón, sin que haya comparecido ante esta Sala el representante de la quiebra ejecutada Amell Juliá y Compañía.—Aceptando los resultandos de la sentencia apelada.—Resultando que interpuesta apelación por los demandados, el Estado y el Ayuntamiento de Aguada, se admitió en ambos efectos por el Juez elevándose los autos previa citación y emplazamiento de las partes.—Resultando: que personadas éstas ante esta Superioridad, el tercerista, el Estado y el Ayuntamiento de Aguada y formado el apuntamiento, evacuó su trámite la representación de este último, pidiendo subsanación de algunas omisiones y por otrosí que se abriera á prueba el pleito para que se practicaran algunas que en primera instancia no se efectuaron por causas no imputables á dicho Ayuntamiento y otras por referirse á hechos que llegaron á su conocimiento después del término de prueba, cuyos hechos eran influencia notoria en el pleito, jurando no haber tenido antes conocimiento de ellos.—Resultando: que por la representación de Don Francisco Juliá y la sucesión de Don Juan Amell y Milá evacuó el trámite mostrando conformidad con el apuntamiento y por otrosí se opuso á que se declare con lugar la petición del Ayuntamiento de Aguada para que se abriera á prueba el pleito en segunda instancia.—Resultando: que por no haber comparecido la representación del Depositario de la quiebra de Amell Juliá y Compañía, se le declararon los estrados del Tribunal para las diligencias sucesivas.—Resultando: que por auto de la Sala, fecha nueve de Febrero del año mil ochocientos noventa y cuatro, se decretó el recibimiento á prueba del pleito en esta segunda instancia para la práctica de la comprobación de las reses con las matrículas y para justificación de si Don Salvador Amell y Massó afirmó que llevaba el dinero en mano para pagar contribuciones exigidas por el Estado y el Ayuntamiento de Aguada, y que se retiró con él por no haber querido el Alcalde extender las matrículas del ganado embargado á favor de Don Francisco Estevez; y sin lugar al recibimiento á prueba en lo relativo al reconocimiento de la firma del documento privado de garantía á favor de Don Juan García, dándose comisión al Juez de Aguadilla para la práctica de la prueba admitida.—Resultando: que los testigos Don Ramón Gonzalez Arce y Don Isidro Feijoo, declaran que Don Salvador Amell y Massó, á quien conocen como representante de la hacienda *Monserate*, manifestó ante ellos que llevaba el dinero para pagar las contribuciones que adeudaba la Sociedad Amell Juliá y Compañía por sus fincas que radican en la jurisdicción de Aguada al Estado y al Ayuntamiento, que solicitó del Alcalde, en vista de que iba á hacer el pago referido que extendiera las matrículas del ganado embargado á nombre del Don Francisco Estevez, comerciante de Aguadilla, que refaccionaba á Don Juan Amell y Milá y que el Alcalde se negó á ello, habiendo ocurrido dichos hechos al día siguiente de efectuado el embargo de los buyes de la hacienda *Monserate*; y Don Ramón Gonzalez Jimenez declaró que oyó decir á Don Salvador Amell y Massó haber estado en la Alcaldía con el dinero para pagar las contribuciones adeudadas.—Resultando: que los peritos Don José Hestor Cardona, Don Buenaventura Marin y Don José Ramón Suarez emiten dictámen en el sentido de que reconocidas las ciento cinco reses embargadas que mostró el Depositario Don Salvador Amell y Massó y confrontadas cada una de las expresadas reses con la certificación de matrícula expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de Aguada que aparece en la cartaportada, reconocían que las expresadas no son á su juicio pericial de las que se relacionan en la certificación de matrículas.—Resultando: que por escrito de 26 de Marzo de 1894 la representación de Don Francisco Juliá y Massó y de la sucesión de Don Juan Amell y Milá tachó á los testigos Gonzalez Arce y Feijoo fundando dicha tacha en que el primero es Escribiente y el segundo Depositario de la Alcaldía de Aguada.—Resultando: que elevadas las pruebas practicadas por el Juzgado de Aguadilla, se decretó por providencia de 10 de Abril de 1894 se adicionara el apuntamiento y practicadas dichas adiciones se anunciaron los autos á las partes por su orden.—Resultando: que citadas las partes se señaló para la vista el día 13 de Septiembre habiéndose celebrado ésta con asistencia de los Letrados del tercerista y Ayuntamiento de Aguada.—Resultando: que con fecha veinte y ocho de Septiembre se dictó por la Sala auto para mejor proveer pidiendo vinieran á los autos las doscientas veinte y tres matrículas originales que en dos de Junio de 1877 se entregaron al Procurador Don Ramón E. Martinez, y requerido éste al objeto expresado, manifestó que dichas matrículas habían sido remitidas á la Península donde residen la mayor parte de los componentes de la sucesión de Don Juan Amell y Milá.—Resultando: que en esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales para la tramitación de esta clase de alzadas.—Siendo ponente el Magistrado suplente Don Wenceslao Bosch.—Considerando: que las escrituras de compraventa de las haciendas *Monserate* y *Vinent*, la de prórroga de arriendo, el testamen-

to de Don Juan Amell y Milá, el acta notarial en que viene fundada la demanda, si bien justifican que Don Juan Amell y Milá y después su sucesión eran en los años de 1860, 1870 y 1872 dueños de un número de cabezas de ganado para los trabajos de las haciendas *Monserate* y *Vinent*, no justifican que esas reses sean las mismas á que se refiere el contrato de cuatro de Mayo de 1887 y por tanto no puede estimarse justificado por la expresada documentación, que sean unas mismas reses las de este último contrato y las que en aquellas escrituras vienen relacionadas.—Considerando: que fundada también la demanda de tercería en el contrato de venta que se contiene en el documento privado de fecha cuatro de Mayo de 1887 otorgada en Aguadilla entre Don Salvador Amell y Massó, administrador de las haciendas *Monserate* y *Vinent* y mandatario de la sucesión de Don Juan Amell y Milá y Don Francisco Juliá y Massó, y por ellos suscritos, y en las matrículas de las doscientas veinte y tres cabezas de ganado vacuno expedidas al parecer, por lo que del debate resulta, á nombre de la sucesión de Don Juan Amell y Juliá y pasadas en venta á Don Francisco Juliá y Massó en 4 de Mayo de 1887, hay que examinar el valor y eficacia de los expresados documentos en la fecha en que respectivamente se redactaron y expidieron para estimar ó no la demanda en los términos propuestos por el actor.—Considerando: que es precepto de la ley 114, título XVIII de la partida 3ª aceptado por sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de Diciembre de 1860 que los documentos privados autorizados con las firmas de los interesados y no por otras personas en concepto de testigos, solamente hacen prueba contra los contratantes y no contra terceros á quienes perjudiquen en sus derechos é intereses, y en tal concepto las acciones que se deriven del documento privado de fecha cuatro de Mayo de 1887 solo pueden efectuarse y redundar en pró ó en contra de la sucesión de Don Juan Amell y Juliá y de D. Francisco Juliá y Massó y en ningún caso en contra del Estado y el Ayuntamiento de Aguada, que tienen el carácter de terceros respecto á dicho contrato privado de fecha cuatro de Mayo de 1887.—Considerando: que practicada prueba por el tercerista en justificación de que tres personas presenciaron la celebración de dicho contrato de cuatro de Mayo de 1887 no por ello puede reconocerse á tal convención mas valor y eficacia ni hacer nacer de él otras obligaciones que las que vienen expuestas en la anterior consideración porque al emplear la ley 114 título XVII del apartado 3ª las palabras "leyendo la carta escrita por otro ó firmada por dos testigos escritos con sus manos" para probar lo que en la carta se contuviera, claro es que exige por manera expresa y terminante la descripción con sus firmas por parte de los testigos del documento y esta circunstancia no concurre en el de cuatro de Mayo de 1887 suscrito solamente con las de las partes contratantes.—Considerando: que es precepto de la ley 1ª título XIV partida 3ª consignado en el artículo 1214 del Código civil hoy vigente, que la prueba de las obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento, y en tal concepto, afirmarse por el tercerista en este pleito que las matrículas del ganado embargado se expidieron años antes del embargo equivocadamente por la Alcaldía de Aguada á nombre de Amell Juliá y Compañía en lugar del nombre de la sucesión de Don Juan Amell y Milá era de su incumbencia el probar por manera evidente que no ofreciera género alguno de duda en este pleito que tal error se había cometido siendo la prueba de esta afirmación, el hecho de mayor importancia, el de mas notoria y decisiva influencia para la declaratoria con lugar de la demanda promovida.—Considerando: que para justificar la afirmación hecha por el tercerista del error en que se supone incurriera la Alcaldía de Aguada al extender las matrículas á nombre de Amell Juliá y Compañía en vez de expedirlas en el de la sucesión de Don Juan Amell y Milá no se ha practicado prueba alguna, y en contra de la exactitud de tal dicho aparecen las circunstancias muy notables de que desde hacía bastante tiempo existía tal error, de que la subsanación del mismo se fuera á solicitar en una Alcaldía distinta de la que era domicilio legal de las reses, de que Don Francisco Juliá y Massó que aparece adquirente del ganado desde cuatro de Mayo de 1887 nada alega sobre tal dominio, cinco días después de la compra ó sea en nueve de Mayo de dicho año al efectuarse el embargo, por lo cual apreciados estos hechos que han aceptado las partes en el debate según las reglas de la sana crítica, desvirtúan la veracidad del error invocado por el tercerista y hacen presumir una connivencia entre éste, la sucesión de Don Juan Amell y Milá y la Sociedad Amell Juliá y Compañía para simular el contrato de cuatro de Mayo de 1887 y hacer ineficaces las gestiones del Estado y del Ayuntamiento de Aguada para el cobro de las contribuciones que debía la Sociedad ejecutada.—Considerando: que según lo dispuesto en la regla 7ª de la Circular de la Intendencia general de esta Isla de fecha 19 de Mayo de 1885 publicada en la GACETA de Puerto-Rico número 70 correspondiente á la propia fecha 19 de Mayo, los Alcaldes están obligados á facilitar las autorizaciones de calidad de ganado de cualquier clase que se soliciten para trasladarlos de una á otra jurisdicción, pero aquellas no serán pretexto para dar de baja en el padrón general el número de cabezas á que la autorización se refiera, lo cual solo podrá efectuarse con vista de la certificación expedida por la Alcaldía á cuya jurisdicción se traslade, acreditando haber sido altas y acompañando las matrículas inutilizadas por

medio de una nota.—Considerando: que es precepto del artículo 11 de la Circular del Gobierno General de esta Isla de fecha 30 de Diciembre de 1882 publicada en la GACETA de Puerto-Rico de fecha 3 de Enero de dicho año que en toda transmisión de propiedad de ganado se presentarán en la Alcaldía los interesados con las matrículas para poner en ellas y en el talón respectivo que quedan inutilizadas y para que se les expidan las nuevas, haciéndose la inutilización en los términos que en dicho artículo se determina.—Considerando: que según lo dispuesto en la regla 11 de la Circular antedicha de 19 de Mayo de 1885 cuando solo para pastar temporalmente se traslade el ganado de una jurisdicción á otra se expresará así en la autorización y únicamente en este caso dejarán de ser altas y bajas en las respectivas jurisdicciones.—Considerando: que el precepto de las reglas 7ª y 11 de la Circular de 19 de Mayo de 1885 y del artículo 11 de la de 30 de Diciembre de 1882, antes transcritos, fueron evidentemente infringidos por la Alcaldía de Aguadilla al expedir matrículas de ganado á nombre de la sucesión de Don Juan Amell y Milá en el momento de recibir la orden de la Alcaldía de Aguada para admitir temporalmente en aquella jurisdicción las de Amell Juliá y Compañía, y en tal concepto dichas matrículas no pueden constituir título legítimo de dominio en favor de aquella sucesión y mucho menos, si por dicho título manifiestamente inválido se derivan perjuicios á terceros que cual el Estado y Ayuntamiento de Aguada no han tenido intervención en aquel acto.—Considerando: que es principio de derecho en materia procesal que nadie puede ir contra sus propios actos y de esta suerte no es admisible la teoría expuesta por el tercerista acerca de la inaplicación en este pleito de las Circulares de 30 de Diciembre de 1892 y 19 de Mayo de 1885 á pretexto de que las solemnidades externas de los contratos de compraventa de muebles é inmuebles solo pueden ser establecidos por las Leyes civiles, porque la demanda viene precisamente acompañada con esas matrículas cuya ineficacia combate y que trajo como documentos, fundamento de su acción y por tanto estimándolos generadores de sus derechos civiles para contrarrestar cualquiera de las excepciones que pudieran invocar los demandados en esta tercería.—Considerando: acerca de la excepción propuesta por el Fiscal y el Ayuntamiento de Aguada sobre la falta de poderes del Don Salvador Amell para otorgar á nombre de la sucesión de Don Francisco Juliá el contrato privado de venta fecha cuatro de Mayo de 1887 es lo cierto que en período de prueba han ratificado la sucesión referida los actos por dicho Don Salvador Amell ejecutados y entre ellos la celebración del contrato citado, y en tal concepto debe desestimarse por tal motivo dicha excepción que solo podría prevalecer si hubiera sido alegada por la sucesión del precitado Don Francisco Juliá.—Considerando: que aunque no aparece justificado en autos que el demandante haya agotado la vía administrativa tratándose de una demanda establecida contra la hacienda, es lo cierto que no habiendo sido alegada tal excepción no cabe hacer declaración sobre la misma según lo que en el artículo 358 de la Ley de Enjuiciamiento civil se determina acerca de las declaraciones que hay que hacer sobre las pretensiones de las partes.—Considerando: que tratándose de revocación ninguna parte debe pagar costas á la otra.—Vistos los textos legales citados.—Fallamos: que revocando la Sentencia apelada debemos absolver de la demanda al Estado y al Ayuntamiento de Aguada sin especial condenación de costas en ambas instancias.—Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Belisario Alvarez.—Dionisio Conde.—Juan Morera Martinez.—Wenceslao Bosch.—PUBLIACIÓN.—Dada y publicada en la anterior Sentencia por los Sres que la firman y leida por el Sr. Magistrado suplente Don Wenceslao Bosch celebrando audiencia pública la Sala hoy veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.—José Ferrer".

Y para la notificación del Depositario de la quiebra Amell Juliá y Compañía, constituido en rebelde en estos autos, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 283 de la ley de Enjuiciamiento civil y providencia de la Sala de Justicia de esta Audiencia, libro la presente en Puerto-Rico á 16 de Enero de 1896.—José Ferrer. 3-3

RESUMEN

DE LAS

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DIARIAS

EFECTUADAS EN EL OBSERVATORIO DE LA JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS

Mes de Enero.—Año de 1896

DÍAS.	Altura media del barómetro.		Temperatura media á la sombra.		Viento dominante.		Lluvia. Milímetros.	Grado de humedad.	Estado del cielo.
	Milímetros.	Centígr.	Dirección.	Máxima intensidad.					
22	760,	35	29, 00	E	5, 32	--	6	Despejado	
23	761,	53	26, 73	E	3, 99	--	6	Nuboso	
24	762,	71	26, 46	E	2, 66	--	6	Idem	
25	763,	11	26, 33	E	7, 98	1.00	6	Despejado	
26	763,	04	25, 86	E	5, 32	0.50	7	Idem	
27	761,	35	27, 26	E	5, 32	--	4	Idem	
28	761,	51	25, 53	NO	6, 65	--	9	Nuboso	